

# Los archivos del movimiento obrero, los movimientos sociales y las izquierdas en la Argentina

## Un caso de subdesarrollo cultural

Horacio Tarcus

La República Argentina es un país paradójico. El historiador Milcíades Peña solía decir que Argentina es el país del «como sí», donde nada es lo que parece, donde detrás de la pátina deslumbrante de modernidad es necesario descubrir el atraso. Aunque Peña estaba pensando sobre todo en el fracaso de la modernización industrial, su visión crítica es también pertinente para pensar el sorprendente atraso bibliotecológico y archivístico de la Argentina.

Los investigadores que proceden del exterior a trabajar durante un tiempo en el país viven la paradoja en carne propia: llegan hipnotizados por el atractivo de la ciudad capital moderna y pujante, pero no tardan en despertar de su sueño al toparse con el estado de abandono, el atraso tecnológico, las puertas cerradas y la opacidad institucional que caracterizan a las bibliotecas y archivos del país. Los investigadores no tardan en ver frustradas sus expectativas de acceder a las fuentes argentinas a través de catálogos digitalizados y de ser atendidos y orientados por personal competente. No tardan en descubrir, por citar los dos casos más resonantes, que los fondos documentales del Archivo General de la Nación duermen en el más absoluto abandono<sup>1</sup> y que la Biblioteca Nacional se ha convertido en una gran sala de espectáculos culturales, con absoluto menoscabo de su función más elemental: reunir, preservar, acrecentar, catalogar y difundir el patrimonio biblio-hemerográfico nacional.<sup>2</sup>

Los investigadores visitantes van descubriendo así la paradoja argentina: un país que desplegó a lo largo de dos siglos de histo-

ria una sorprendente riqueza cultural, de la que los argentinos estamos orgullosos, e incluso presumidos, pero que sin embargo no se preocupa en preservar. Un país agobiado por sus fantasmas históricos, que vive mirando un pasado que nunca logra saldar; un país que vive preso de sus dilemas históricos; un país cuyos hombres políticos, como en *El XVIII Brumario de Luis Bonaparte*, se empeñan en vestir los trajes del pasado y se nombran con los nombres de los muertos; un país cuyos funcionarios se llenan la boca hablando de patrimonio y de memoria; pues bien, ese país, al mismo tiempo, no muestra interés en generar condiciones para resguardar institucionalmente sus fuentes históricas.

### Atraso económico y subdesarrollo cultural

¿Cómo entender la paradoja argentina? Es necesario comenzar por despejar cualquier explicación de este atraso en términos del «factor económico»: me refiero a la conocida coartada del ahogo presupuestario propio de un país periférico, el que le impediría derivar los recursos necesarios para la modernización de sus bibliotecas y archivos públicos. Es que nuestro atraso es ostensible no sólo respecto de los países poderosos del llamado Primer Mundo que destinan significativos recursos a sus archivos y bibliotecas, sino incluso respecto de países latinoamericanos como Chile, Brasil y México.

En otros términos: el atraso argentino no se limita al terreno económico. En el plano de la preservación de nuestro patrimonio cul-

<sup>1</sup> En 1990 la jefa del Departamento de Conservación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Doris Hamburg, visitó el AGN y elaboró un informe devastador sobre su situación. Casi veinte años después, la situación es la misma, o más grave aún. El Informe puede leerse como adjunto a la Recomendación 74/06 que el Defensor del Pueblo de la Nación elevó al Ministro del Interior a causa del estado crítico de la institución, con fecha 31/8/2006.

<sup>2</sup> Las propias instituciones del Estado argentino, como la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) o la Auditoría General de la Nación, han elaborado reiteradamente informes críticos sobre la grave situación de la BN. Un informe oficial de la propia dirección de la institución emanado en el año 2004

bajo la gestión de Elvio Vitali reconocía que «la Biblioteca Nacional incumple con sus tareas básicas, esto es, adquirir, conservar, preservar, restaurar y difundir el patrimonio editado de los argentinos». A pesar de los empeños realizados entre los años 2004 y 2006, la Biblioteca Nacional volvió a funcionar como un centro cultural. Durante enero del año 2007 se suscitó un fuerte debate público acerca de la misión de la Biblioteca Nacional a partir de una carta que dirigí al entonces Secretario de Cultura de la Nación, José Nun, presentando mi renuncia al cargo de subdirector (que ejercí durante todo el año 2006), debate que aún se encuentra accesible en diversas páginas de Internet.

tural somos también un país perfectamente subdesarrollado. John Holloway ha insistido con razón en que en un mundo globalizado, ya no importa tanto para la prosperidad de un país cuánto produce cada economía nacional, sino cuánto capital producido globalmente es capaz de atraer y retener cada Estado en su territorio. De la misma manera, en el terreno del patrimonio cultural, no importa tanto el capital simbólico que hemos sido capaces de producir nacionalmente: lo que está en juego es nuestra capacidad de valorizarlo como tal y, por ende, de generar las condiciones para preservarlo y socializarlo.

Los avatares de nuestro patrimonio bibliográfico, hemerográfico y archivístico son una prueba flagrante de esta afirmación. El estado calamitoso de nuestras bibliotecas, hemerotecas y archivos públicos es el resultado de un proceso donde se han combinado y mancomunado de la peor manera factores tan diversos como la ausencia de políticas públicas en materia bibliotecológica y archivística; la discontinuidad institucional del país, que también afectó a las bibliotecas y los archivos públicos; su falta de transparencia institucional frente a lectores, donantes y la sociedad en general; la ausencia de concursos públicos capaces de incorporar o promover profesionales competentes; la toma de las instituciones por parte de microcamarillas y sindicatos mafiosos que parasitan el Estado; y, *last but not least*, la falta de presupuesto.<sup>3</sup>

Tomemos el caso del destino de las grandes bibliotecas privadas así como de los fondos de archivo, sobre todo privados, ya se trate de escritores, políticos, militantes sociales, etc. Cuando no existen políticas públicas activas para preservar dicho patrimonio crucial para la historia de un país, se plantean tres opciones: permanece en manos privadas; es adquirido por coleccionistas privados; o bien es vendido a bibliotecas universitarias o centros de documentación del exterior del país.

## Bibliotecas y archivos como «propiedad familiar»

Sin duda, las grandes bibliotecas privadas jugaron un rol importante, si no decisivo, en la historia cultural de nuestro país. Tal es su peso, que hasta podría trazarse una historia de la cultura argentina, al menos de la cultura de élite, haciendo la historia de las grandes bibliotecas personales, desde la de Juan Baltasar Maziel en los años de Virreinato del Río de la Plata, hasta la de Federico Vogelius en los años '60.

En la época de la Colonia, el rigorismo inquisitorial, la ausencia de imprentas y las trabas comerciales hicieron que, en ausencia de bibliotecas públicas, se constituyeran a fines del siglo XVIII grandes bibliotecas privadas, como la del Obispo Manuel Azamor y Ramírez<sup>4</sup>

o la del citado Maziel. Iniciado el proceso de la independencia, a pesar de los esfuerzos por nutrir a la joven nación de bibliotecas públicas, siguieron jugando un rol clave las bibliotecas privadas. Baste recordar, en la década de 1830, la biblioteca personal de Marcos Sastre, que pone a disposición de los estudiosos como Gabinete de Lectura, anexo a su famosa Librería Argentina de la calle Reconquista, donde se nutren de literatura romántica y utopística los jóvenes de la Generación del 37<sup>5</sup>; o la biblioteca del sanjuanino Manuel Quiroga Rosas, que Sarmiento dejara instalada en la memoria de los argentinos como una fuente preciosa de conocimientos renovadores.<sup>6</sup> Tras la batalla de Caseros llegan al país muchos emigrados extranjeros portando sus bibliotecas, mientras los hombres de la élite constituyen grandes bibliotecas privadas, «en defecto de las públicas, a la sazón pobres y mal organizadas». «Raro fenómeno —sigue Buonocore—, que ha sido señalado, en diversas oportunidades por ilustres estudiosos visitantes de otros países de Europa y América».<sup>7</sup> En efecto, las bibliotecas privadas y las colecciones de archivos que llamaban la atención de los visitantes extranjeros pertenecían a figuras de la élite como Vicente F. López, Bartolomé Mitre, Ángel J. Carranza, Andrés Lamas, Vicente G. Quesada (cuya biblioteca fue luego completada por su hijo Ernesto), Miguel Navarro Viola, Manuel R. Trelles, Enrique Peña, Estanislao S. Zevallos o Francisco P. Moreno. Las generaciones siguientes no fueron ajenas a esta tradición, como lo demuestran las grandes bibliotecas reunidas por un José Ingenieros, un Agustín P. Justo, un Carlos Astrada o un José Aricó.

Aceptamos que, a falta de grandes bibliotecas públicas, las bibliotecas privadas jugaron un rol importante en la cultura del país. Lo penoso es que su destino final no fue siempre su institucionalización pública, como es el caso del Museo Mitre en Buenos Aires o la Biblioteca Aricó anexa a la Biblioteca Central de la Universidad de Córdoba. Bibliotecas extraordinarias, que reunían libros antiguos de enorme valor, colecciones de revistas muy escasas, grabados, litografías, mapas, documentos y manuscritos —como la de Andrés Lamas, la de Zevallos, la del Perito Moreno y la de Vogelius— se pulverizaron en subastas públicas (salvo la de Lamas, cuya dispersión se evitó porque la compró en remate la Biblioteca Nacional de Montevideo). La de los Quesada fue una de las bases sobre la que se organizó la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, mientras que la biblioteca americanista del General Justo fue adquirida por la Biblioteca Nacional de Lima. Recientemente se dispersó la biblioteca filosófica y el archivo de Carlos Astrada, a través de su venta fraccionada a libreros de viejo...

En 1917 se abría un número de la **Revista de Filosofía** con esta reflexión: «La historia cultural y política de nuestro país duerme en archivos familiares... La poca preocupación ambiente y el celo de los poseedores de los archivos hacen que informaciones inte-

<sup>3</sup> Sobre la ausencia de políticas públicas en materia archivística entendidas como una «política de la memoria», véanse las reflexiones de Roberto Pittaluga, «Notas a la relación entre archivo e historia», en **Políticas de la Memoria** n° 6/7, p. 199 y ss.

<sup>4</sup> El propio Obispo poseía en su biblioteca muchos de los libros prohibidos del *Index...* V. Domingo Buonocore, **Libreros, editores e impresores de Buenos Aires**, Buenos Aires, Bowker, 1974, p. 1 y ss.

<sup>5</sup> Félix Weinberg, **El Salón Literario**, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1976, p. 40 y ss.

<sup>6</sup> D. F. Sarmiento, **Recuerdos de Provincia** (1850), Buenos Aires, EUDEBA, 1960, pp. 186-187.

<sup>7</sup> Buonocore, *op. cit.*, p. 166.

resantísimas, que podrían prestar eficaz ayuda a historiadores y sociólogos, se esterilicen restando fuentes preciosas a la investigación científica. Nuestra historia... no puede, pues, ser escrita». Lamentablemente, casi noventa años después, gran parte del patrimonio histórico subsiste bajo la forma de patrimonio familiar.

Sin embargo, hoy la responsabilidad es otra: entonces, en 1917, el hincapié estaba puesto en la falta de modernización y de conciencia pública de las familias de la élite. La revista de José Ingenieros, en su afán modernizador y profesionalista, venía a recordar que la época de Don Vicente Fidel López, en que el actor histórico y el historiador se confundían, en que el archivo histórico y el archivo familiar eran uno solo, y en que la historia oficial se practicaba como la historia de las grandes familias patricias, había quedado muy atrás. Esas familias debían aceptar el relevo, tanto de su lugar de custodios del patrimonio así como del oficio de historiadores, por parte de los archivos y bibliotecas públicos y de los sociólogos e historiadores profesionales.

Si bien crecieron desde entonces a lo largo del siglo XX los campos profesionales de la sociología y de la historia, el proceso de cesión del patrimonio familiar al espacio público fue muy débil. Muchos archivos de personalidades de la cultura y la política argentina siguen celosamente resguardados por sus descendientes como propiedad familiar: no hay espíritu de legado, pues los herederos no tienen confianza en la capacidad de las instituciones públicas para resguardarlo y disponerlo a la consulta. El sentimiento de los donantes es, cuando se trata de los grandes archivos y bibliotecas públicas, que el patrimonio va a desaparecer entre los engranajes de una insondable estructura burocrática; o bien, cuando se trata de institutos de una escala menor, que va a ser apoderado por la facción que lo controla. Esto es: las grandes instituciones no ofrecen garantías de preservación; las pequeñas, de acceso público.

## El patrimonio cultural y el coleccionismo

En el mercado de los libros, las revistas y los papeles argentinos, dado que las bibliotecas y archivos públicos están ausentes, la principal demanda proviene, o bien de los coleccionistas privados, o bien de las universidades y centros del exterior del país.

Detengámonos un momento en el coleccionismo privado. A diferencia de los políticos o intelectuales de la élite, que forman grandes bibliotecas porque los libros son imprescindibles para el ejercicio de su profesión, los coleccionistas están animados por una pasión bibliófila, siendo rara vez lectores sistemáticos o estudiosos de las colecciones que atesoran. Hay, desde luego, un tesón bibliófilo propio del coleccionista en muchos de los primeros —tal el caso de Mitre, de Navarro Viola o de los Quesada—, así como la mayor eficacia en la búsqueda de la serie completa exige a los segundos adquirir un conocimiento exhaustivo. Pero el coleccionista suele ser una figura más oscura, menos visible, poseedor de una cultura más parcial, fragmentaria e instrumental: generalmente son hombres que se ganan la vida en otros que-

haceres —empresarios, profesionales liberales—, en los que el coleccionismo funciona más al modo de un *hobby* que de una necesidad intelectual. Mientras que para los investigadores la gran biblioteca es en definitiva una suerte de taller que encierra sus herramientas de trabajo, para los coleccionistas sus series debidamente ordenadas y clasificadas pueden adquirir, en el límite, un carácter lúdico, decorativo o de prestigio social. De modo que si el acceso del investigador a las grandes bibliotecas y archivos familiares no suele ser sencillo, mucho más restringido y condicionado aún suele serlo en el caso del coleccionista, que guarda celosamente su tesoro bajo siete llaves...<sup>8</sup>

Los defensores del libremercado de bienes culturales presumen que el coleccionismo ha sido un factor de enriquecimiento del patrimonio nacional. Esgrimen en su favor que muchos coleccionistas privados, actuando como «investigadores» a veces sobre la base de su intuición y experiencia, recuperaron y organizaron durante siglos un patrimonio hasta entonces disperso, que finalmente terminaron cediendo a instituciones públicas. Pero como se ha señalado a propósito del caso del patrimonio de México (sobre todo, pero no exclusivamente, al arqueológico), «muchos formaron y forman sus colecciones con juicios subjetivos, con piezas compradas según sus predilecciones estéticas, o por su rareza y exotismo. También se conocen casos cuyo objetivo central ha sido ganar prestigio social; algunos más, por su afán casi enfermizo de atesorar, pero sobre todo por la esperanza de encontrar en el futuro mejores postores, es decir para especular». Para esta autora el coleccionismo tuvo valor en el siglo XIX y principios del XX, pero en los albores del siglo XXI su existencia no se justifica.<sup>9</sup>

En la Argentina de los últimas décadas, si llega a manos de un librero una carta de Mariano Moreno o de José de San Martín, un documento de puño y letra de Juan D. Perón, de Ernesto Guevara o de Jorge Luis Borges, difícilmente acuda a ofrecerlo en venta a la Biblioteca Nacional o al Archivo General de la Nación: se dirigirá a centros y universidades del extranjero, o a los coleccionistas locales. Pero el problema de la enajenación de nuestro patrimonio no radica en los libreros, pues es inevitable que a falta de demanda del sector público, acudan necesariamente al privado. Ni tampoco está en los coleccionistas ni en las instituciones del exterior, pues ninguna ley restringe la compra y la venta, e incluso la salida al exterior del país, de documentos de valor histórico. El problema está en la falta de un marco legal regulatorio, y sobre todo en la ausencia de políticas públicas acerca del patrimonio bibliotecológico, hemerográfico y archivístico.

<sup>8</sup> En la Argentina, en las páginas de agradecimientos a quienes permitieron el acceso a fuentes con que suelen abrirse los libros de investigadores, la satisfacción por haber llevado a término la obra así como las normas usuales de la cortesía, hacen que se suela omitir el arduo trabajo de pesquisa tras el poseedor privado de los documentos, así como la serie de pruebas sucesivas con que los coleccionistas pueden someter al investigador antes de abrirle sus tesoros. Las pruebas suelen reducirse si se trata de un investigador del primer mundo.

<sup>9</sup> Gilda Cubillo Moreno, «El coleccionismo y la compra-venta de bienes culturales en México», en *Memoria* n° 128, México D.F., octubre de 1999.

## Drenaje patrimonial hacia los centros del (primer) mundo

En el caso de la venta a los coleccionistas, el patrimonio queda vedado a la consulta pública; en el caso de la venta a centros y universidades del exterior del país, sólo es accesible a los argentinos en condiciones de viajar y estudiar en el extranjero.

Respecto al drenaje patrimonial hacia el extranjero, no sólo se van dólares o «cerebros», sino también libros, revistas, cartas, manuscritos... Así como los investigadores egipcios se ven obligados a estudiar la cultura de su país en los museos de Londres y de París, los investigadores de la historia y el pensamiento argentinos sólo pueden consultar invaluable fuentes de nuestra cultura acudiendo a ciudades como Ámsterdam o Turín, Berlín o California. Por ejemplo, la hemeroteca y el archivo que sobre anarquismo y movimiento obrero argentinos dispone el Instituto de Investigación Social de Ámsterdam, son más completos que la suma de todos los existentes en la Argentina. Allí se conservaron durante más de un siglo, sobreviviendo incluso a la invasión nazi; aquí estos testimonios de nuestra memoria obrera apenas sobreviven penosamente, en colecciones no siempre completas, en algunas bibliotecas anarquistas.

Hay bibliotecas y archivos enteros que, por distintas vías y variados motivos, fueron saliendo del país. Ya señalamos que la biblioteca monumental de los Quesada constituyó la base sobre la que se fundó el Instituto Iberoamericano de Berlín y la de Agustín P. Justo fue adquirida por la Biblioteca Nacional de Lima; el archivo del filósofo Rodolfo Mondolfo, que sus descendientes donaron a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, partió sin embargo hace varios años rumbo a Italia; la biblioteca y el archivo del historiador Luis Sommi fue llevada después de su muerte a algún lugar de Moscú; Liborio Justo donó gran parte de su cuantiosa biblioteca y hemeroteca al Archivo Edgar Leuenroth de la Universidad de Campinas; el archivo de Victoria Ocampo puede consultarse en la Universidad de Harvard, los de Álvaro Yunque y María Rosa Oliver en la Universidad de Princeton; los de Roberto Arlt en el Instituto Iberoamericano de Berlín; el de Diego Abad de Santillán en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam... Los ejemplos podrían multiplicarse.

El universitario estadounidense, europeo, mexicano o brasileño tiene a su alcance extraordinarias bibliotecas y archivos, pudiendo consagrarles todo su tiempo y sus energías; el investigador argentino que se propone trabajar con este tipo de patrimonio sabe que el 50% de sus energías estarán destinadas a la búsqueda de sus fuentes, debiendo peregrinar por múltiples bibliotecas públicas, archivos privados y librerías de viejo. A menudo debe comprar sus fuentes, convirtiéndose sin quererlo en atesorador privado. Y así como el coleccionista es un investigador principiante, insensiblemente el investigador argentino deviene un coleccionista amateur. Incluso ha llegado a suceder que los investigadores rivalicen, no por el rigor o la originalidad de sus interpretaciones, sino por la posesión de sus «propias» fuentes. Su mayor orgullo es estampar, a pie de página, esta manifestación de nuestro subdesarrollo cultural: «Original en el archivo del autor».

No podemos ignorar que, desde la antigüedad, la historia de las grandes bibliotecas (así como la de los grandes museos) está directamente vinculada a los proyectos de expansión imperial. Todos los conquistadores tomaron para sí o enviaron a sus soberanos botines de guerra o presentes de tierras exóticas que probaban sus hazañas, sus conquistas y sus descubrimientos. El inglés Thomas Richards, en **The Imperial Archive**, un clásico de los estudios poscoloniales, analiza los modos de apropiación y sistematización de lo que llama el «archivo imperial» británico. Este no sería tanto una biblioteca ni un museo, advierte, sino «una fantasía de conocimiento catalogado y reunido al servicio del Estado y del Imperio». Cuando los poderes públicos británicos hablan de «material catalogado» se refieren, de un siglo a esta parte, a «conocimientos ubicados bajo la jurisdicción especial del Estado»<sup>10</sup>. Su función de «reservorio del conocimiento universal» fue relevada luego por los Estados Unidos, que desde la Guerra Fría, y sobre todo desde la Revolución Cubana, ha construido una verdadera maquinaria de búsqueda, rastreo, compra y preservación de bibliografía latinoamericana. Cualquier bibliotecario argentino (o latinoamericano) sabe, por ejemplo, que si precisa información sobre una publicación de su país, sea antigua o la novedad más flamante, debe comenzar por ingresar al catálogo de la página web de la *Hispanic Division* de la *Library of Congress* de los Estados Unidos.<sup>11</sup>

Sin embargo, no podríamos reaccionar ante este drenaje con un nacionalismo cultural, por otro lado hipócrita, cuando no generamos en el propio país las condiciones para preservarlo y socializarlo. El interés de estos países por nuestra producción cultural no puede dejar de ser para nosotros, en cierto sentido, motivo de orgullo; y su capacidad de preservarlo, causa de tranquilidad. El problema radica aquí, en nuestro país: en la ausencia de instituciones públicas interesadas en preservar efectivamente este patrimonio más allá de enfáticas enunciaciões; y en la falta de una cultura cívica que las acompañe. En ese sentido, no deja de tener razón Nicolás Helft, uno de los mayores coleccionistas de primeras ediciones y manuscritos de Jorge Luis Borges, cuando señalaba provocativamente poco tiempo atrás: «Carece de sentido batallar por la permanencia en el país de papeles valiosos cuando no existen políticas, recursos económicos, técnicos ni humanos para la preservación y difusión». En cambio, las universidades y centros del primer mundo «tienen la tecnología para resguardarlos y difundirlos. Estoy de acuerdo con que nuestros papeles queden en la Argentina, pero ¿de qué me sirve el original si por dejarlo aquí lo someto al deterioro ambiental, la burocracia y hasta el peligro de robo?»<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Thomas Richards, **The Imperial Archive: Knowledge and Fantasy of Empire**, London, Verso, 1993, cit. en Josefina Ludmer, **El cuerpo del delito. Un manual**, Buenos Aires, Perfil, 1999, pp. 216-223.

<sup>11</sup> Contrariamente, nuestro país —tan orgulloso por otra parte de sus tradiciones culturales— es uno de los pocos del mundo que no ha confeccionado su bibliografía nacional.

<sup>12</sup> Ana Laura Pérez, «El mercado de los originales», en **Cultura y Nación. Clarín**, 20/7/2002, p. 3.

## Las fuentes del movimiento obrero, los movimientos sociales y las izquierdas en los archivos y las bibliotecas oficiales

En el caso de los archivos y publicaciones del movimiento obrero, los movimientos sociales y las izquierdas, la situación es tanto o más dramática. También aquí la Argentina exhibe una de sus características paradójicas, por la cual la vitalidad de sus movimientos populares —manifiesta a lo largo de un siglo tanto por su intenso activismo político así como por el despliegue de su capacidad organizativa y su riqueza cultural, desde el movimiento anarquista a fines del siglo XIX y comienzos del XX hasta la «nueva izquierda» de los años '70—, no encontró una expresión proporcional a su importancia en bibliotecas y archivos públicos que contaran con una dotación mínima de material documental reunido en torno a esas experiencias y a la vez disponible para la consulta y la investigación.

Por ejemplo, en vano buscará un investigador la historia obrera en el Archivo General de la Nación (AGN). El AGN no es tanto un archivo histórico como la memoria oficial del Estado. Su propia lógica de organización replica la del Estado y mira, por lo tanto, a la sociedad «desde arriba». Desde luego, el investigador avezado que sigue la pista, por ejemplo, de las fuentes para el estudio del anarquismo argentino, sabe que podrá encontrar algunas de ellas en las causas judiciales llevadas contra los anarquistas. Por su parte, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación sólo albergan marginalmente tramos de la historia obrera argentina.<sup>13</sup>

A las razones aducidas arriba respecto del problema de las fuentes archivísticas en general, habría que añadir aquí una serie de razones que hacen a la falta de preocupación de las instituciones públicas por este tipo específico de fuentes. En primer lugar, habría que señalar que la historia obrera sólo tortuosamente ha sido incluida dentro de lo que suele denominarse «la historia nacional»: la historia del movimiento obrero anarquista, socialista y comunista es parcialmente integrada dentro de los prolegómenos del movimiento obrero peronista, por lo que normalmente no se considera la historia de estas corrientes más allá de mediados del siglo XX. Otros movimientos sociales, como el movimiento estudiantil, el de las mujeres, el antifascista de la década de 1930 y primeros 1940, o los movimientos de solidaridad internacional (con la España Republicana en la década de 1930, o con la Revolución Cubana en la década de 1960), escapan casi por completo al horizonte de la mirada oficial y por lo tanto también a

sus bibliotecas y sus archivos. Significativamente, ninguna Universidad pública, ni siquiera la Universidad de Buenos Aires, ha suplido esta ausencia.<sup>14</sup>

En segundo lugar, habría que señalar que la producción gráfica de los movimientos sociales y de las izquierdas suelen adoptar características específicas que muchas veces hacen compleja su reunión y preservación. La propia condición de órganos de movimientos emergentes o contrahegemónicos, a menudo perseguidos o reprimidos, los convierte en publicaciones de aparición irregular, sujetas a sucesivas metamorfosis en su formato, a cambios de nombre para evadir la censura, e incluso a la aparición clandestina. Y las grandes bibliotecas públicas difícilmente coleccionan publicaciones periódicas de aparición irregular, folletos políticos, documentos gremiales y partidarios, mucho menos aún volantes o afiches políticos. Resulta evidente que la discontinuidad institucional sufrida por la Argentina a lo largo de buena parte del siglo XX, agravada por el terrorismo de Estado desplegado por el último régimen militar (1976-1983), hizo aún más difícil la tarea de preservar este tipo de fuentes históricas. A menudo los golpes militares vinieron acompañados de verdaderas *razzias* dirigidas no sólo a las bibliotecas personales de los militantes, sino también a librerías y bibliotecas.<sup>15</sup>

### Archivos estatales / archivos de la sociedad

Pero si el AGN se ha restringido a ser, en el mejor de los casos, la memoria del Estado, y si la Biblioteca Nacional se limita a recibir, también en el mejor de los casos, las publicaciones de edición nacional que le llegan por depósito legal, han existido a lo largo del siglo XX los que podríamos denominar bibliotecas y archivos de la sociedad civil, verdaderos reservorios patrimoniales de los movimientos sociales argentinos y que además organizaron sus fuentes históricas de otro modo, pues han mirado la sociedad «desde abajo», desde la acción social y política.

La Argentina cuenta con una larga tradición de bibliotecas populares, bibliotecas obreras, universidades populares y archivos de movimientos sociales, tradición que remonta a fines del siglo XIX. Han sido las bibliotecas de los gremios obreros, las bibliotecas socialistas de la «Sociedad Luz» y de la Casa del Pueblo, así como las bibliotecas de los centros anarquistas las que durante décadas contribuyeron a preservar la memoria obrera, anarquista y socialista. Los socialistas, sobre todo, hicieron un verdadero cul-

<sup>13</sup> En el año 1968 el historiador Nicolás Iñigo Carrera llevó a cabo un relevamiento de las publicaciones periódicas disponibles entonces, entre otros reservorios, en la Biblioteca Nacional. Si bien la presencia de la prensa obrera en la Biblioteca Nacional argentina no alcanzaba un equivalente al de la prensa obrera presente en las Bibliotecas Nacionales de países como Chile, Brasil o México, su número no era despreciable. Lamentablemente, desde que la Biblioteca Nacional inauguró su nueva sede en 1992, muchas de aquellas publicaciones relevadas en 1968 ya no están disponibles a la consulta... Véase N. Iñigo Carrera, «Materiales para el estudio de la historia del movimiento obrero argentino. Publicaciones periódicas oficiales, políticas y sindicales», en *Cuadernos de CICSO*, Buenos Aires, s/f.

<sup>14</sup> Es llamativo el contraste con el Brasil, donde todas sus universidades, tanto públicas y privadas, cuentan en su seno con nutridos centros documentales especializados en historia social en general y en historia obrera en particular, abocados a recuperar y catalogar el patrimonio documental de sus respectivas regiones. Lamentablemente, también es enorme el contraste en el plano profesional: si bien la Argentina tiene el precedente en América Latina de haber creado en 1922 la Carrera de Bibliotecario (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA) y en 1959 la Escuela de Archivología (Universidad Nacional de Córdoba), el desarrollo teórico y práctico de estas disciplinas en el Brasil, siendo mucho más reciente, es al mismo tiempo mucho más avanzado.

<sup>15</sup> Judith Gociol y Hernán Invernizzi, *Un golpe a los libros. Represión en la cultura durante la última dictadura militar*, Buenos Aires, EUDEBA, 2002.



to de la creación y el buen funcionamiento de sus bibliotecas. Sin embargo, al ser instituciones sujetas a los avatares de sus movimientos sociales y políticos, vivieron con ellos momentos de legalidad como de persecución, de expansión como de declive. Su carácter subsidiario les impedía alcanzar la suficiente autonomía y la necesaria profesionalización. Es así como la Biblioteca Obrera, fundada en 1897 a iniciativa de un grupo de dirigentes socialistas, fue destruida en 1953 cuando en el contexto de graves enfrentamientos entre el Partido Socialista y el gobierno peronista, grupos afines a este último incendiaron la Casa del Pueblo. La primigenia biblioteca, hemeroteca y archivo del Partido Comunista Argentino fue embarcada rumbo a Moscú en 1930, pocos días después del golpe militar de septiembre. Pero no todas las pérdidas se debieron a la represión, sino que la crisis y la pérdida de gravitación social, política y cultural del movimiento obrero y de las izquierdas también tuvieron su peso. Con la crisis de la izquierda, muchos locales anarquistas, socialistas y comunistas cerraron sus puertas, y a menudo sus bibliotecas y archivos se perdieron o dispersaron. En 1963 la Biblioteca Obrera volvió a erigirse con lo que se salvó del incendio de la Casa del Pueblo, y sobre la base de donaciones particulares, como Biblioteca Obrera «Juan B. Justo». Declara un patrimonio de 90.000 volúmenes (<http://www.adondevamos.com/bibliotecas/Biblioteca-Obrera-Juan-B-Justo/16/?js=0>), pero se encuentra en un estado penoso de abandono, no contando siquiera con un catálogo de su patrimonio. La otra gran biblioteca socialista, la perteneciente a la Sociedad Luz, fundada en 1899 por el médico socialista Ángel Giménez, fue parcialmente desguasada y permanece al día de hoy librada al olvido. Otro tanto sucede con la Biblioteca y el Archivo que perteneciera al dirigente socialista Alfredo Palacios, que atesora alrededor de 20 mil volúmenes ([www.fundacionalfredolpalacios.org](http://www.fundacionalfredolpalacios.org)).

La memoria anarquista preservada en la Argentina se concentra sobre todo en dos bibliotecas de esa orientación: la Biblioteca Popular «José Ingenieros» (<http://www.nodo50.org/bpji>) y la Biblioteca y Archivo de Estudios Libertarios (BAEL) perteneciente a la Federación Libertaria Argentina ([www.libertario.org.ar/bael](http://www.libertario.org.ar/bael)). Mientras que las piezas que componían la biblioteca y el archivo de la antigua FORA (Federación Obrera de la Región Argentina) en gran medida se han abandonado, disgregado y perdido, las jóvenes generaciones que tomaron el relevo en las dos primeras bibliotecas anarquistas citadas llevaron a cabo un voluntarioso trabajo de recuperación patrimonial, ordenamiento y catalogación. Pero como en otras bibliotecas de este tipo, donde a la escasez de recursos económicos se suma la propia concepción libertaria contraria a la profesionalización del trabajo, se reducen las posibilidades de ofrecer horarios accesibles para la consulta de lectores e investigadores.

La crisis del mundo comunista también llevó al cierre de decenas de locales que atesoraban libros, folletos y documentos relativos a la historia de esta corriente. La Biblioteca y el Archivo pertenecientes al Comité Central del Partido Comunista de la Argentina fue organizada en la década de 1990 por el militante Enrique Israel con vistas a su apertura pública, pero lamentablemente ésta nunca se concretó. Algunos de los fondos comunistas son hoy accesi-

bles en la Biblioteca del Centro Cultural de la Cooperación, fundado en 1998, que dispone de un Catálogo en Línea (<http://walysoft2.com.ar/pergamo/ccc/cgi-bin/pgopac.cgi?form?default>).

También se resisten a cerrar sus puertas algunas antiguas bibliotecas anarquistas y socialistas del interior del país, como la Biblioteca Popular «Juventud Moderna» de Mar del Plata, la Biblioteca «Pascual Vuotto» de esa misma ciudad, o la Biblioteca «Alberto Ghirardo» de Rosario. Lo señalado para los locales de Buenos Aires se repite o se agrava aún más en las provincias: sostenidas gracias al esfuerzo militante, estas instituciones subsisten más como reservorios documentales que como centros de documentación con sus fondos catalogados y accesibles al investigador.

La pérdida de peso social y político de la clase obrera argentina en el concierto del país gravitó también durante las últimas décadas sobre las bibliotecas y los archivos que atesoran los gremios y las centrales obreras. El principal acervo gremial es el que dispone el Centro de Documentación «Eva Perón», perteneciente a la Confederación General del Trabajo (CGT), fundada en 1930. Si bien preserva sobre todo la memoria obrera peronista, este archivo atesora también las actas y buena parte de la prensa obrera correspondientes a las diversas centrales obreras argentinas, de orientación anarquista, sindicalista o socialista, que precedieron a la CGT o compitieron con ella (FORA, UGT, CORA, etc.). Lamentablemente, como en todos los casos analizados hasta ahora, las condiciones de accesibilidad a los catálogos y a los materiales mismos no están a la altura de su riqueza patrimonial. Lo mismo sucede con el resto de la memoria sindical argentina, que se preserva, a menudo en condiciones inadecuadas, en los antiguos locales gremiales, tales como La Unión Ferroviaria, La Fraternidad, el Sindicato de Mecánicos (SMATA), etc.

Para concluir este rápido recorrido, señalemos que como contrapartida de la fragilidad institucional en lo que hizo a la preservación de los archivos, se desarrolló durante las últimas décadas una fuerte acción de recolección individual. Muchos dirigentes así como investigadores fueron acopiando en forma personal valiosas colecciones a medida que declinaban las instituciones políticas y gremiales. Algunos de ellos simplemente privatizaron estas fuentes, engrosando sus colecciones privadas; otros, más generosos, crearon nuevas instituciones para hacer accesible lo que habían recuperado. Entre ambos, muchos semi-institucionalizaron sus bibliotecas y archivos.

Entre los esfuerzos que fueron de lo personal a lo institucional merecen señalarse al menos dos. Por una parte, un cúmulo de fuentes relevantes para el estudio del sindicalismo clasista cordobés de inicios de la década de 1970 (sindicatos SITRAC y SITRAM) fue reunido tesoneramente por la historiadora Susana Fiorito en el marco de la Fundación Pedro Milesi, fundada por ella misma en la ciudad de Córdoba ([www.fundacionpmllesi.org.ar](http://www.fundacionpmllesi.org.ar)).

Asimismo, buena parte de las colecciones de periódicos gremiales de la corriente «sindicalista» y varios fondos de archivo de dirigentes sindicales argentinos (como Sebastián Marotta,

Francisco Pérez Leirós, etc.) fueron reunidos por el sociólogo Torcuato Di Tella en el marco de la Fundación Simón Rodríguez, de Buenos Aires. También a su iniciativa debemos la existencia del valioso Archivo de Historia Oral del Movimiento Obrero Argentino llevado a cabo en la década de 1970, y que hoy se encuentra depositado en la Universidad Torcuato Di Tella.

## La experiencia de REMOS

El principal impulso para recuperar, proteger, organizar y modernizar los archivos obreros y sociales argentinos provino, como en el resto de América Latina, de una iniciativa de la Fundación Pablo Iglesias de Madrid. Aurelio Martín Nájera, responsable de la Biblioteca y el Archivo de la FPI, se dirigió en enero del año 1991 a diversas instituciones latinoamericanas poseedoras de fondos documentales con vistas a la constitución de una Red Iberoamericana de Archivos obreros. «La situación permanente de semilegalidad, clandestinidad y represión en que se desenvolvió la vida de las organizaciones obreras —decía el comunicado— hizo que la conservación, salvaguardia o sistematización en la custodia de la documentación generada en la actividad política, sindical y social fuera una quimera en la mente voluntariosa de los viejos militantes obreros. Por otro lado, la actividad de estas organizaciones al margen —cuando no enfrentada radicalmente— de las instituciones estatales, ha motivado que los archivos de este tipo que han logrado sobrevivir quedaran fuera de los sistemas nacionales de archivo de cada país, salvo pequeñas excepciones».<sup>16</sup>

El llamado señalaba que la democracia recobrada tanto en España como en América Latina, así como la conciencia despertada en medios académicos, gremiales y políticos, ponía a la orden del día el trabajo mancomunado de identificación de reservorios patrimoniales.

La invitación española fue el estímulo para que se constituyera una red de archivos argentinos referidos al movimiento obrero. Recogieron el guante Susana Fiorito, de la Fundación Pedro Milesi de Córdoba, y Nicolás Iñigo-Carrera de PIMSA (Programa de Investigación sobre los Movimientos Sociales Argentinos), quienes luego de sucesivos contactos y reuniones, lograron convocar una asamblea que en noviembre 1991 reunió en Buenos Aires a 45 instituciones y personas. Adoptó el nombre de REMOS, Red de Recuperación y Protección de los Archivos de Trabajadores y Movimientos Sociales de la Argentina.

Finalmente, después de un año y medio de comunicaciones, en abril de 1992 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires la Reunión que dio por constituida la Asociación Iberoamericana para la Recuperación y Protección de los Archivos de los Trabajadores y sus organizaciones (AIRPATO). Según puede leerse en el Informe

que presentó en dicha reunión, REMOS se había fijado como objetivos: «Recuperar la memoria histórica de los trabajadores y los sectores populares, y el movimiento social en general; organizar la búsqueda, identificación y protección de sus archivos y materiales históricos; crear conciencia de la necesidad de protección de los materiales existentes; evitar la pérdida de materiales por deterioro, venta o destrucción; lograr financiamiento para organizar y archivar documentación y para acondicionar material sin procesamiento y protección adecuados».<sup>17</sup>

La asamblea de la AIRPATO logró reunir 40 representantes de toda Iberoamérica. Se presentaron 17 informes, relativos a 19 países iberoamericanos. Sus actas impresas constituyen al día de hoy el principal relevamiento de conjunto de repositorios de fuentes obreras en España y casi toda Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de este inicio auspicioso, la AIRPATO murió antes de nacer. Sucumbió a las fuerzas centrífugas que, como es frecuente, ponen en juego las estériles internas políticas y los afanes hegemónicos, así como una diversidad estructural que suele entorpecer los consensos entre las instituciones muy dispares entre sí y realidades nacionales también muy desiguales.

Por su parte, la REMOS argentina sobrevivió al fin de la AIRPATO, aunque subsistiendo como una red más bien virtual que real. El mérito y al mismo tiempo el límite de REMOS fue la diversidad de instituciones que logró reunir en red. Dicha diversidad daba la pauta de la dispersión de las fuentes obreras argentinas.<sup>18</sup>

Como se señala en el balance de sus propios hacedores, la debilidad de REMOS radicó en la propia diversidad de sus miembros y en su carácter abierto y reticular, condiciones que «hacen que muchas veces sea difícil llevar adelante proyectos que deben contar con la aprobación de todos los miembros de la red». ([www.pimsa.secyt.gov.ar/remos/remos.pdf](http://www.pimsa.secyt.gov.ar/remos/remos.pdf)).

Sin embargo, REMOS dejó como saldo una primera red constituida, elaboró un primer cuadro de situación de los archivos obreros en la Argentina y confeccionó una guía de los repositorios. El Informe de REMOS presentado en la asamblea de la frustrada

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>18</sup> REMOS articuló centros independientes (como la Fundación Pedro Milesi, o la Fundación Simón Rodríguez), centros académicos latinoamericanos (como CLACSO y FLACSO), bibliotecas y archivos vinculados a corrientes políticas (como la Federación Libertaria, la Biblioteca Alberto Ghiraldo de Rosario, la Biblioteca Obrera «Juan B. Justo» o la Fundación Alfredo Palacios); bibliotecas y archivos sindicales (como el Centro de Documentación Eva Perón del Instituto Jauretche de la CGT, el Círculo y Sindicato de Prensa, La Fraternidad-seccional Córdoba, el Sindicato de Camioneros, el SMATA Córdoba, etc.), centros universitarios públicos y privados (Universidad Di Tella, el Centro de Historia Obrera de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de Centro-Tandil, las Universidades de Bahía Blanca, del Comahue, Nacional de La Plata, etc.); entes estatales (como el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Trabajo, el Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país, etc.), entes internacionales (como la Oficina de la OIT para Argentina, Uruguay y Paraguay) y una cantidad de bibliotecas y archivos personales (como la Biblioteca Ismael Iñigo Carrera, la Biblioteca Domingo Mercante perteneciente a Nicolás Ciarnello, el Archivo del Sindicato de Petroleros administrado por Vilma Paura, la biblioteca socialista de Víctor O. García Costa, etc.).

<sup>16</sup> Asociación Iberoamericana para la Recuperación y Protección de los Archivos de los Trabajadores y sus Organizaciones (AIRPATO), **Documentos de la primera reunión iberoamericana para la recuperación y protección de los archivos de los trabajadores y movimientos sociales**. 1992, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1992, p. 523.

AIRPATO, a pesar de tratarse de un texto consensuado entre instituciones muy diversas, no podía disimular el estado crítico en que se hallaban los archivos obreros y sociales en la Argentina. Ya sea en forma directa o ya en forma indirecta, se hablaba de «dispersión» de las fuentes y de la información, de ausencia de recursos técnicos así como de criterios profesionales en el trabajo archivístico conforme a las normas internacionales, de dificultades para el acceso al patrimonio por parte de la comunidad, de ausencia de redes a nivel local y regional y de falta de «conciencia archivística». Incluso se atrevía a manifestar «la preocupación [...] por las condiciones en que se está haciendo el traslado de materiales a la nueva sede de la Biblioteca Nacional y el destino de las colecciones que la integran».<sup>19</sup>

Pero acaso el gran mérito de esta red fue la realización del primer censo de repositorios obreros argentinos, cuyos resultados fueron publicados en un folleto titulado «Bibliotecas y Archivos documentales de los trabajadores argentinos». Según el mismo, para fines de la década de 1990, REMOS había logrado reunir información sobre los fondos obreros de 46 instituciones. Es significativo que muchas instituciones, al llenar la encuesta, dejaran en blanco los casilleros correspondientes a los rubros «Acceso», «Sala de consulta», «Horarios». Otros adherentes a REMOS, alrededor de 80 instituciones, ni siquiera brindaron información acerca de sus fondos. Como se señala en el balance de REMOS ya citado, dado que «la mayor parte de sus integrantes son particulares o pequeños centros de investigación o sindicatos, que no tienen estructura para sistematizar la información, [...] ha sido muy difícil contar con bases de datos y tratar de normalizarlas» (*op. cit.*).

## Archivos del poder / archivos de la resistencia

Los primeros años de la década de 1990, cuando los vientos del neoliberalismo azotaban a una clase obrera en retirada y a una izquierda en crisis, constituyeron un marco histórico y político poco propicio para la afirmación de experiencias como AIRPATO o REMOS. La Argentina conocía por esos años índices de desocupación inéditos en su historia, la izquierda se batía en franca retirada y el movimiento de derechos humanos nacido bajo la última dictadura militar no lograba reponerse de un ciclo de declive iniciado en 1987 con la sanción de las leyes de impunidad y acentuado en 1990 con las leyes de indulto decretadas por el entonces presidente Carlos S. Menem. En este marco, la historia obrera que había comenzado a insinuarse en la agenda académica de la posdictadura quedaba reducida a un papel residual, mientras que la historia de las izquierdas no tenía carta de ciudadanía en el mundo universitario. Los archivos obreros o de las izquierdas aparecían entonces como carentes de toda relevancia y solo parecían constituir una carga onerosa para sus depositarios, los antiguos gremios y los viejos partidos en crisis.

<sup>19</sup> «Informe de REMOS ante la Reunión Iberoamericana...», en *Ibid.*, p. 24.

Sin embargo, en los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente una serie de circunstancias coincidentes favorecieron la revalorización de las experiencias militantes del pasado y con ellas las políticas de archivo. Acaso la multitudinaria marcha convocada en marzo de 1996 por los organismos de Derechos Humanos con motivo del 20 aniversario del golpe militar puede considerarse como el punto de partida de un nuevo ciclo. Es que, como ha señalado recientemente Daniel James, en años recientes ha eclosionado «lo que podríamos llamar el desarrollo de la cultura de la memoria en la Argentina, relacionado a su vez con un contexto político distinto. La Argentina ha vivido durante la última década su propio auge de la memoria, sobre todo en relación con las víctimas de la dictadura. Ha pasado de una cultura de amnesia oficialmente sancionada, vinculada a los gobiernos de Carlos Menem, a algo parecido a una cultura de duelo oficialmente dirigida bajo el presidente Kirchner. Este desplazamiento se ha reflejado en una explosión de los sitios archivísticos de la memoria —tanto virtuales y con base en Internet como reales—, primordialmente dedicados a la recolección de testimonios orales de los sobrevivientes. Ha habido una creciente intersección de una verdadera fiebre de archivo con lo que se ha denominado 'era del testigo' y 'época del testimonio'».<sup>20</sup>

En un contexto en que se reabrían las causas judiciales a los responsables del terrorismo de Estado, la sociedad civil recuperaba algunos de los archivos del poder estatal al mismo tiempo que producía nuevas fuentes testimoniales sobre los llamados «años de plomo». Es así que en marzo de 2001 varios organismos de Derechos Humanos conformaron la asociación Memoria Abierta, con el propósito de construir un archivo de testimonios orales sobre el terrorismo de Estado y que luego se extendió a otros proyectos. Paralelamente, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires se conformaba la Comisión Provincial por la Memoria, integrada por destacados miembros de esos mismos organismos, la Comisión tomó a su cargo el ordenamiento y catalogación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, «un extenso y pormenorizado registro de la represión política sobre hombres y mujeres a lo largo de medio siglo». La Comisión fue creada en agosto del 2000 y el archivo de la DIPBA fue abierto paulatinamente a la consulta pública a partir del año 2003.

Ahora bien, en los albores de la recuperada democracia argentina, asistimos a la emergencia —como parte de un proceso más vasto de elaboración colectiva de la experiencia traumática de la última dictadura militar— de una importante masa de literatura testimonial acerca de las experiencias de la represión, la cárcel, la tortura, la desaparición y el exilio. El sujeto privilegiado de esta literatura no era tanto el militante como la víctima de la represión ilegal, paraestatal. Si bien está presupuesto que la víctima era un activista político, su experiencia militante sólo podía aparecer en esta literatura de modo sublimado y elíptico.

<sup>20</sup> Daniel James, «Fotos y cuentos. Pensando la relación entre historia y memoria en el mundo contemporáneo», en **Políticas de la Memoria** n° 8/9, verano 2009, p. 9.



Sólo recientemente, en el lapso de los últimos diez años, hemos visto emerger un nuevo campo de testimonios, menos centrados en la represión y cada vez más en las propias prácticas militantes de las décadas de 1960 y 1970. La militancia política comienza a recuperar un primer plano y se la puede considerar en su positividad. Aquellos hombres y mujeres cuyos rostros y cuyos nombres a menudo sólo conocíamos como víctimas de la represión militar o paraestatal, a partir (aproximadamente) de 1996 comenzamos a reconocerlos como activos militantes de las izquierdas, con sus siglas, sus periódicos y sus puestos específicos de lucha.

El primer momento tuvo como libro paradigmático el **Nunca más** (1984); el segundo momento, los tres gruesos volúmenes de **La Voluntad** (1997-98).

La eclosión de esta problemática se manifestó antes en el periodismo de investigación que en la historiografía académica. Sin embargo, en este contexto de creciente interés colectivo por las experiencias del pasado reciente, muchos historiadores, sociólogos, politólogos, historiadores del arte y otros científicos sociales, especialmente los de las nuevas generaciones, comienzan a abocarse profesionalmente a la problemática de las experiencias militantes del pasado reciente.

En los últimos años, ese renovado interés por las experiencias militantes del pasado reciente comenzó a proyectarse también sobre un pasado algo más remoto, y temas como la cultura anarquista de comienzos del siglo XX, las vicisitudes de los combatientes argentinos en la guerra civil española, la experiencia del movimiento antifascista o la formación de la «nueva izquierda», ganan progresivamente interés entre los investigadores jóvenes e incluso de los lectores. No sólo se ha ampliado el foco de interés, sino también las perspectivas de estudio, pues los nuevos abordajes no sólo han recuperado el avance que representó la historia social de los años 1960 y 1970, sino también las innovaciones que en tiempos recientes representaron los estudios de género, los estudios culturales, la nueva historia intelectual y la historia de los intelectuales, las nuevas perspectivas que ponen el foco en la relación entre arte y política, o los estudios sobre los procesos de construcción de la memoria y de las identidades colectivas.

En suma, una nueva generación de investigadores, munida de nuevas herramientas teóricas y metodológicas, buscó comprender su presente histórico interrogándose primero sobre lo que ha dado en llamarse el «pasado reciente»; pero no tardó en descubrir que para comprender dicho pasado reciente (digamos el período que va del golpe militar de 1966 a la recuperación democrática de 1983), debía que remontarse, al menos, a un ciclo histórico más extenso, que remitía a 1917, sino a 1890 (por referir dos fechas emblemáticas). No podía desentrañarse el sentido de la llamada «nueva clase obrera» de fines de los años 1960 sin inscribirla en el ciclo de la clase trabajadora argentina abierto a fines del siglo XIX. Asimismo, aunque la llamada «nueva izquierda» de los años '60 y '70 tuviera su punto de partida identitario en su diferenciación con la «vieja izquierda», es ininteligible sin ella. Así como el Movimiento por los Derechos Humanos no nació con la últi-

ma dictadura militar, sino que tiene una extensa historia previa, como atestiguan instituciones como el Socorro Rojo, los Comités por la Libertad de Sacco y Vanzetti, o la sección argentina de la Liga por los Derechos del Hombre.

## La experiencia del CeDInCI

El CeDInCI ([www.cedinci.org](http://www.cedinci.org)) fue un fruto de este nuevo interés por la historia de los trabajadores, los movimientos sociales y las izquierdas, así como una de las instituciones que lo promovió y lo hizo propicio.

El proyecto nació a mediados de la década de 1990 de la inquietud por la recuperación de archivos y bibliotecas pertenecientes a viejos militantes por parte de un grupo de historiadores que ejercíamos la docencia y la investigación en la Universidad de Buenos Aires. A los historiadores que pensábamos que la agitada trayectoria de los movimientos sociales argentinos y de las corrientes ideológico-políticas que aspiraron a expresarlos y orientarlos, a pesar de las graves derrotas de los años 1970 y 1980, seguían constituyendo un gran estímulo intelectual y político, se nos presentaba un obstáculo insalvable: el del acceso a las fuentes gráficas, orales o filmicas, a las publicaciones políticas, sindicales y culturales vinculadas a las luchas sociales en la Argentina, o a los fondos de archivo de las instituciones o personales, fuentes todas ellas imprescindibles para nuestra labor. Como queda dicho más arriba, en los archivos y bibliotecas oficiales o universitarios estas fuentes eran escasas, mientras que los archivos y bibliotecas de sindicatos y partidos de izquierda eran por lo general escasamente accesibles para los investigadores. Nos desesperaba la constante evasión de archivos y bibliotecas al exterior del país y mucho más todavía el abandono, el desguase o la pérdida lisa y llana de valiosos repositorios en nuestro propio suelo.

Construir un archivo que reuniera, recuperara y preservara el patrimonio histórico-cultural de las clases subalternas se constituía así en una tarea absolutamente necesaria. Algunos de nosotros habíamos tenido la suerte de conocer algunas instituciones más allá de nuestras fronteras que nos sirvieron como modelo, como el Instituto de Historia Social de Ámsterdam (IISG); la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea (BDIC) de Nanterre; el Instituto Iberoamericano de Berlín (IAI); la Fundación Pablo Iglesias de Madrid y el Archivo Edgar Leuenroth (AEL) de Campinas.

Fue en 1997 que el núcleo fundador resolvió bautizar la nueva institución como Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas.<sup>21</sup> Con ese nombre se inscribió en abril de 1997 ante la Inspección General de Justicia como asociación civil sin fines de lucro. Entendimos que la expresión «cultura de izquierdas» ampliaba el espectro del centro más allá del mundo del trabajo sin

<sup>21</sup> Integraron el núcleo inicial Horacio Tarcus, Ana Longoni, Gabriel Rot, Blas de Santos, Roberto Pittaluga, Jorge Cernadas, Irene Muñoz y Alberto Teskiewitz.



dejar de incluirlo, y el plural daba garantías de diversidad política e ideológica. Durante todo el año 1997 hicimos llamamientos, a través de una serie de reuniones, para reunir donaciones de fuentes documentales y contribuciones económicas. A través de una colecta logramos adquirir ese mismo año el fondo documental que sirvió de piedra basal del CeDInCI: la biblioteca, hemeroteca y archivo reunido a lo largo de su vida por el militante José Paniale. En ese fondo se preservaba buena parte de la memoria obrera, anarquista, socialista, comunista y trotskista de la primera mitad del siglo XX argentino, aunque no faltaron tampoco documentos relativos al movimiento de la reforma universitaria, ni los periódicos y boletines antifascistas de los años '30, ni los volantes de la campaña electoral de 1945-46 en las que iba a triunfar el peronismo...

El dinero reunido alcanzó para alquilar una casa en el barrio porteño de Abasto (Sarmiento 3433) y fue acondicionada gracias al trabajo colectivo de muchos amigos. El CeDInCI abrió sus puertas a la consulta pública en abril de 1998 integrando en lo fundamental dos acervos: el fondo Paniale, que reunía sobre todo publicaciones de la primera mitad del siglo XX, y el por mí reunido, que abarcaba fundamentalmente publicaciones de la segunda mitad del siglo XX. En dos años, el Centro logró consolidar un equipo voluntario formado por una decena de catalogadores e investigadores y a partir del año 2000 comenzó a retribuir económicamente, aunque muy modestamente, a sus catalogadores/investigadores. En el año 2002 se mudó a una nueva sede, mucho más amplia, en el barrio porteño de Flores, cedida en comodato por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a la labor desempeñada.

Si desde entonces se ha transformado en un centro vivo, activo, en constante crecimiento patrimonial gracias a sus donantes, crecientemente concurrido por investigadores del país y del extranjero (recibiendo alrededor de 15 lectores diarios), es porque ha logrado ofrecer accesibilidad a sus lectores y garantías a sus donantes.

El CeDInCI dispuso desde su fundación la libre consulta de todo su acervo con la única condición de la previa asociación del lector a través de una cuota voluntaria. Desde un principio ofreció asesoramiento a sus lectores al mismo tiempo que elaboró catálogos de su patrimonio que permitieron la autoconsulta. Además, desde el año 2008 está cargando los registros correspondientes a cada uno sus fondos y de sus colecciones en una base de datos única, accesible en línea (<http://cedinci.no-ip.org/pergamo/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?ISRCH>). Para mediados del año 2011 la base contaba ya con cincuenta mil registros.

El CeDInCI propició el renacimiento de una forma de transmisión de la memoria que casi se había extinguido en nuestro país: la del legado. A lo largo de estos once años, varios cientos de viejos militantes políticos, gremiales o estudiantiles, o bien sus descendientes, contribuyeron a completar y enriquecer aquel patrimonio inicial.

Hoy el fondo documental del CeDInCI reúne la mayor colección de materiales sobre la cultura de izquierdas en la Argentina, abarcando las producciones político-culturales de las principales

corrientes políticas del país desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. El arco político atraviesa corrientes tales como: anarquismo, socialismo, sindicalismo, comunismo, trotskismo, maoísmo, guevarismo, nacionalismo revolucionario y toda la familia de la «nueva izquierda».

Por una parte, reúne la mayor biblioteca del país especializada en pensamiento social y político. En total posee más de 30.000 volúmenes organizados temáticamente: Biblioteca marxista (Fondo Alfredo Alonso), Biblioteca Latinoamericana, Biblioteca de Estética y Filosofía Política (Fondo Héctor Raurich), Biblioteca de Pensamiento Argentino, Biblioteca Ruso-soviética, Biblioteca de Literatura Social, Biblioteca del Movimiento Obrero y la Guerra Civil Española, Biblioteca de Mujeres, Biblioteca de Arte, Cine y Teatro políticos y Biblioteca de Referencia.

Además, en el año 2011 recibió alrededor de diez mil volúmenes que constituían la biblioteca personal del filósofo argentino José Szabón, que en este momento están en proceso de catalogación.

Su Hemeroteca consta de:

- 1800 colecciones de revistas y periódicos políticos argentinos, desde **La Protesta** (anarquista) y **La Vanguardia** (socialista) hasta las publicaciones de la izquierda actual;
- 1600 colecciones de revistas culturales argentinas y 50 colecciones de folletos seriados, entre las que se destacan **El Mercurio de América**, **Revista de Filosofía**, **Síntesis**, **Sur**, **Davar**, **Punto de Vista**, entre otras;
- 1000 colecciones de revistas y periódicos de las izquierdas del mundo, sobre todo Europa y América Latina (como *Amauta* de Lima, **Le Devenir Social** de París, **Critica Sociale** de Roma, **Tierra y Libertad** de Barcelona, **Die Kommunistische Internationale** de Moscú, o **Casa de las Américas** de La Habana);
- 800 colecciones de periódicos del movimiento obrero argentino y de otros movimientos sociales (mujeres, estudiantes, etc.);
- 1.000 colecciones de publicaciones políticas y gremiales del resto del mundo.

Sus fondos audiovisuales están compuestos por:

- 5000 fotografías;
- 1000 afiches políticos;
- discos de pasta y 200 discos de vinilo con registros de voces de dirigentes políticos, marchas partidarias y «canciones de protesta» de los años 1960 y 1970.

Sus fondos de archivo se componen del siguiente modo:

- 36 fondos personales de dirigentes, militantes y escritores, como José Ingenieros, Nicolás Repetto, Juan Antonio Solari, Samuel Glusberg, Héctor P. Agosti, Milcíades Peña, Salvadora Medina Onrubia, entre otros, que suman más de 30.000 cartas, manuscritos y papeles personales;<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Adriana Petra, «Los documentos particulares como fuentes históricas: la experiencia del CeDInCI con los fondos de archivo de las izquierdas argentinas», en **Políticas de la Memoria** n° 6/7, p. 206 y ss.

- Millares de folletos, volantes, documentos partidarios y recortes de prensa de organizaciones políticas y sociales. El Inventario de sus 36 archivos particulares y colecciones fotográficas y audiovisuales puede consultarse en: <http://www.cedinci.org/archivo.htm#>

Consciente de que un Centro de Documentación no es sólo un reservorio documental, el CeDInCI ha promovido en estos once años de vida toda una serie de iniciativas relativas a la socialización de sus fuentes, la investigación y el debate.

Por una parte, llevó a cabo un trabajo sistemático de microfilmación y digitalización, cumpliendo con una tarea de preservación pero también de socialización, pues gracias a la reproducción fotográfica o digital de muchas de sus valiosas colecciones no solamente se han preservado del deterioro y de la manipulación, sino que además se encuentran disponibles en otras bibliotecas y centros de documentación del mundo. El CeDInCI llevó a cabo hasta el presente cuatro proyectos de microfilmación que totalizan más de 200 rollos de microfilm, contando sobre todo con el apoyo de Universidad de Harvard, Latin American Microform Project (LAMP), Instituto Iberoamericano de Berlín (IAI) y Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea de Nanterre (BDIC).

Además, ha digitalizado y puesto a disposición de sus lectores y del público en general en formato CD, varias colecciones de revistas de muy difícil acceso, tales como **Certamen Internacional de La Protesta** (1927), **Contorno** (1953-1959), **Pasado y Presente** (1963-1973) y **Cristianismo y Revolución** (1966-1971).

El CeDInCI ha promovido la investigación y el debate mediante la organización de cursos y conferencias, así como con la realización bianual de las Jornadas de Historia de las Izquierdas (años 2000, 2002, 2005 y 2007). Tanto las IIIas. jornadas (consagradas a «los exilios latinoamericanos») como las IVas. («la prensa política y las revistas latinoamericanas») han convocado a numerosos investigadores no solo de Buenos Aires sino también del interior del país y de América Latina. En noviembre de 2011 ha convocado a las Vas. Jornadas, bautizadas como «José Ingenieros y sus mundos». Sus actas se editan en CD-rom.

Ha participado también activamente, junto a otras instituciones amigas, de la organización de las sucesivas Jornadas sobre Historia Reciente, de las las. Jornadas de Pensamiento Crítico José Sazbón (Rosario, 2010), 1<sup>as</sup> Jornadas Internacionales José Aricó (Córdoba, 2011) y ha propiciado por tres años consecutivos el Encuentro de investigadores sobre anarquismo (2009, 2010 y 2011). Además, desde el año 2009 funciona en su seno un Seminario de Historia intelectual que reúne mensualmente una docena de investigadores.

En el año 1998 lanzó un boletín de informaciones, **Políticas de la Memoria**, que en el n° 3 se transformó en revista y aparece como anuario de investigaciones e informaciones del CeDInCI. Allí se publican ensayos, debates, investigaciones y se reproducen antiguas fuentes documentales.

Lanzó sus propias colecciones de libros bajo el sello CeDInCI editores, que comenzaron en el año 2006 con el libro de Vera Carnovale, Federico Lorenz y Roberto Pittaluga (comps.), **Historia, memoria y fuentes orales**. En el año 2007 apareció una antología de la prensa antifascista: Andrés Bisso (comp.), **El antifascismo argentino**. El año siguiente apareció en la misma serie y en coedición con el Instituto Iberoamericano de Berlín el volumen: Sandra Carreras, Horacio Tarcus, Jessica Zeller (eds.), **Los socialistas alemanes y la formación del movimiento obrero argentino, Antología del Vorwärts (1886 - 1901)**. También en el 2008 apareció, en coedición con la Academia Argentina de Letras, un volumen conteniendo una edición digital facsimilar, un estudio introductorio y un índice de la revista anarquista **Martín Fierro** (1904-1905). Parte del acervo visual del CeDInCI fue reunido en el volumen **Gráfica política de izquierda**, editado por La Marca Editores en el año 2005. Además, muchos integrantes del equipo del CeDInCI colaboraron en una obra en la que trabajé durante varios años, entendiendo que era una herramienta insustituible para una labor como la nuestra. Me refiero al **Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la «nueva izquierda». 1870-1976**, el primero en su género en América Latina.

El CeDInCI ha publicado, además, cuatro catálogos con sus fondos documentales: **Catálogo de publicaciones políticas argentinas; Catálogo de publicaciones de los movimientos sociales de la Argentina y el mundo; Catálogo de publicaciones culturales argentinas y Los socialistas argentinos a través de su correspondencia**.

En suma, CeDInCI nació como un proyecto independiente, autofinanciado a través de los aportes voluntarios de sus socios y mediante la constante presentación de proyectos de catalogación, microfilmación o edición. Ha logrado sumar a los apoyos recibidos de parte de las instituciones del propio país —Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, Secretaría de Cultura de la Nación, Fondo Metropolitano de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Fundación Antorchas, Centro de Estudios Históricos e Información «Parque de España» —; una aceitada red de vínculos con instituciones del exterior (Universidad de Harvard, LAMP, SEPHIS, Instituto Iberoamericano de Berlín, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, Fundación Ford).

En 1999 el CeDInCI fue declarado de «interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Desde 2006 fue designado como lugar de trabajo de CONICET y alberga investigadores y becarios en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde el año 2006 el CeDInCI es miembro de IALHI (International Association of Labour History Institutions, [www.ialhi.org](http://www.ialhi.org)) y ha participado en varias de sus convenciones anuales.

Pero probablemente fue en junio de 2010 que el CeDInCI recibió el mayor reconocimiento de toda su historia: en esa fecha suscribió un acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) mediante el cual se constituyó en una unidad académica de esa prestigiosa casa de estudios.

Finalmente, pero no menos importante, quisiera destacar que el



CeDInCI trabaja incansablemente en la *creación de una conciencia cívica* acerca del valor público de estos acervos, de la necesidad de que no se desguasen ni se enajenen. A través de artículos en su revista, de cursos y conferencias, o de cartas de lectores y de ensayos en los diarios, se dirige a funcionarios públicos y a la población en general buscando contribuir a una cultura de la preservación, de la recuperación, de la valorización de este patrimonio. Contra la opacidad de las instituciones, fomenta la transparencia: la ciudadanía tiene *derecho* a saber qué fuentes atesoran sus instituciones. Contra el espíritu corporativo, la «apropiación» institucional y la «privatización» patrimonial, viene abogando por el libre acceso a catálogos y fuentes, atendiendo no sólo a las necesidades del investigador, sino incluso al derecho de la ciudadanía a la información. Si es cierto aquello de que el acceso de la ciudadanía a los archivos y bibliotecas públicos es un índice de su calidad democrática, habría que concluir que la Argentina es uno de los países menos democráticos de la región.

Comencé este texto señalando que el problema de los archivos y las bibliotecas argentinas no era exclusiva y decisivamente presupuestario. Decía, pues, que era más grave: un problema de subdesarrollo cultural. La experiencia de once años de CeDInCI prueba que se puede hacer mucho en este terreno con escasos recursos económicos y apenas una decena de profesionales capacitados y dispuestos. Si las instituciones públicas visualizaran, como hicimos los que creamos el CeDInCI, el valor histórico de este patrimonio, podrían, también, generar la confianza necesaria para restablecer el espíritu de legado, y enriquecerse no sólo mediante compras sino a su vez a través de donaciones. Como nosotros, las bibliotecas y archivos del Estado podrían establecer proyectos conjuntos de microfilmación o digitalización con instituciones del exterior del país, por los cuales éstas afrontarían los costos a cambio de llevarse una copia, lo que permitiría a las instituciones argentinas preservar los originales, contar con una copia digitalizada y al mismo tiempo obtener los fondos para financiar el trabajo. Los recursos alternativos podrían ser muchos, pero sólo una conciencia y una voluntad colectivas que asuman, con espíritu benjaminiano, aquello de que «el patrimonio está en peligro», podrán generar nuevos pactos entre donantes y donatarios, coleccionistas e investigadores, instituciones locales y del exterior, con el objetivo de frenar la enajenación y la privatización de nuestro patrimonio archivístico y sentar las bases de un nuevo ciclo en la historia bibliotecológica y archivística de la Argentina.